

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



**JUZGADO SETENTA Y CUATRO (74) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS**

Bogotá D.C., tres (03) de diciembre del dos mil veinte (2020)

ACCIÓN DE TUTELA

Radicación: 2020-140
Accionante: Karen Nataly Rua Lemus
Accionado: Secretaria Distrital de Movilidad y Simit
Decisión: Niega Tutela por Hecho Superado

ASUNTO

Resolver la acción de tutela instaurada por la ciudadana **KAREN NATALY RUA LEMUS**, quien obra en nombre propio, en contra la Secretaria Distrital de Movilidad y la Federación colombiana de Municipios - Simit, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, consagrado en la Constitución Nacional.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

La actora, instauro la presente acción, indicando los siguientes hechos:

1. Que el 28 de junio de 2018, le fue impuesto el comparendo electrónico No. 11001000000020561308, el cual se canceló y realizó el curso pedagógico para obtener el descuento; que ese comparendo fue realizado con el vehículo de placa VEZ 246 (taxi), del cual no tiene permiso de conducir; el pago y el curso no lo realizó la accionante. Que al verificar en la página del Simit, el comparendo No. 11001000000020561308, no ha sido descargado y aparece su estado pendiente, y en la página de la Secretaria de Movilidad, no tiene comparendos pendientes.
2. Agrega que el 28 de abril de 2017, le impusieron el comparendo electrónico No. 11001000000016068866, el que fue cancelado en el banco Caja Social el 03 de junio de 2017; realizó el curso

pedagógico para obtener el descuento; anexa el certificado de asistencia No. 1202054; que al revisar la página del Simit, el mismo no ha sido descargado y aparece en estado pendiente y en la página de la Secretaria no tiene comparendos pendientes; por lo que procedió a solicitar mediante derecho de petición ante la Secretaria Distrital de Movilidad y Simit, radicados en la entidad antes citada el 16 de septiembre de 2020, con los radicados Nos. RAD-BTE 2485832020 y RAD-BTE 248567; de los cuales no ha recibido respuesta alguna. Indica que lo único que recibió de la Secretaria de Movilidad, fue la copia de la Resolución 250766 del 28 de octubre de 2020, ordenando seguir con el procedimiento coactivo en su contra.

PRETENSIONES

La accionante solicita se ampare su derecho fundamental de petición y en consecuencia de ello, se ordene a la Secretaria Distrital de Movilidad y Simit, dar una solución de fondo a su solicitud radicada el 16 de septiembre de 2020.

RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

Secretaria Distrital de Movilidad

La directora judicial de la entidad en mención, solicita al despacho que se rechace por improcedente y no vulneración en relación con el amparo invocado por la parte accionante; pretende la actora que a través de la acción de tutela se le dé respuesta a los derechos de petición radicados con el fin que se le descarguen las ordenes de comparendo 11001000000020561308 y 11001000000016068866, indicando que fueron cancelados y realizaron los cursos pedagógicos. El artículo 86 de la Carta Política establece la posibilidad del ejercicio de la acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales en los casos en que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, siempre y cuando el afectado, conforme lo establece el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que la referida acción se utilice como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable.

Agrega que la Dirección de Atención al Ciudadano, brindó respuesta a **KAREN NATALY RUA LEMUS**, indicándole que con relación al comparendo 11001000000020561308, no se evidencia pago ni curso realizado; con respecto al comparendo 1100100000006068866, se encuentra en estado cancelado en el sistema de información de SICON de la SDM y se envió requerimiento para el respectivo descargue y actualización del comparendo, en la plataforma del Simit y no se encuentra pendiente; y fue informado a la accionante a través del correo electrónico Nataly_rua0417@hotmail.com, aportado por la misma cuando registro

la petición. Dado que la entidad que representa dio contestación y trámite a la petición de la accionante, concluye que se encuentra ante el fenómeno del hecho superado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad a la que representa no ha vulnerado derechos fundamentales del accionante, por lo que solicita al despacho se rechace por improcedente la presente acción de tutela, al evidenciar que no hay perjuicio irremediable y el accionante no acreditó el cumplimiento de los requisitos para que la acción de tutela proceda como mecanismo de protección subsidiario o transitorio.

Federación Colombiana de Municipios – SIMIT

El coordinador del grupo jurídico de la entidad en mención, informó al despacho que en ejercicio de la función pública atribuida por el legislador en los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002, se autorizó a la entidad que representa, implementar y mantener actualizado a nivel nacional, el sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – Simit, función que vienen cumpliendo a través de la Dirección Nacional – Simit, como administrador de la base de datos de infractores de las normas de tránsito a nivel nacional, que sirve de herramienta esencial para llevar un consolidado del registro de los contraventores en el territorio colombiano, lo cual es posible en la medida en que los organismos de tránsito reportan las infracciones de tránsito al sistema de información, se cuenta con un registro nacional actualizado y disponible a nivel nacional, se garantiza que no se efectúa ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito, en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si este no se encuentra a paz y salvo.

Que la entidad que representa, ostenta la calidad de administrador del sistema, pero no está legitimada para efectuar ningún tipo de inclusión, exclusión, modificación o corrección de registros, por cuanto solo se limita a publicar la base de datos suministrada por los Organismos de Tránsito a nivel Nacional sobre infracciones y multas impuestas y cargadas por cada organismo. Y que todo lo publicado en sus bases de datos, es información de carácter público emitida por las autoridades competentes para tal efecto; que se revisó el estado de cuenta No. 1013605074 de la accionante y reporta la siguiente información: los comparendos Nos. 11001000000020561308 del 28/06/20218, estado pendiente de pago; el 11001000000027719348 del 12/11/2020 estado pendiente y el 11001000000016068866 del 28/04/2017 estado pendiente.

Que teniendo en cuenta lo enunciado por la accionante en los hechos respecto de la petición presentada, revisaron el sistema de gestión documental de la entidad que representa, y no se encontró derecho de petición alguno presentado por la accionante, toda vez que como lo señaló el accionante en los hechos y como se puede observar en los anexos, la petición no fue radicada ante esa entidad sino ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Indica que frente a la solicitud de la accionante de actualizar la información en el sistema, se aclara que la naturaleza de su representada es la de administrar el sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de Tránsito, que la información reportada por los organismos de tránsito a nivel nacional por ser ellos quienes tienen el carácter de autoridades y tránsito y por lo tanto emiten los actos administrativos que se reflejan en el sistema.

PRUEBAS

Con el escrito de tutela, el accionante aportó los siguientes documentos:

- 1 Fotocopia de los derechos de petición, con fecha 16 de septiembre de 2020, radicados 2485832020 y 2485672020, dirigido al Simit, suscrita por **KAREN NATALY RUA LEMUS**.
- 2 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante.
- 3 Fotocopia del oficio SDM-DGC-172484-2020, y la resolución 250766 del 28/10/2020, donde se ordena seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo, por el no pago de las obligaciones impuestas.

Por su parte la Secretaria Distrital de Movilidad, allego copia de la respuesta dada al accionante de fecha 26 de noviembre del 2020, SDM-DGC-150251-2020; notificación correo electrónico de la respuesta al accionante; pantallazo del comparendo 11001000000020561308, donde se observa que no se ha cancelado ni realizado el curso; pantallazo del comparendo 1100100000006068866; poder y resolución para actuar en esta acción constitucional. El Simit, adjuntó a la respuesta los pantallazos de los comparendos que registra la accionante y que se encuentran activos.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Competencia

De conformidad con lo normado en el Decreto 2591, en concordancia con el Decreto 1983 de 2017, que dispone reglas de reparto, es competente este Despacho para conocer de la presente acción de tutela. Frente al factor territorial se tiene que el domicilio de la accionante y accionados es Bogotá.

2. Del *sub examine*

La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, prevista como un mecanismo de carácter constitucional extraordinario y expedito, por medio del cual toda persona puede demandar ante los Jueces, por sí o a través de representante, la protección inmediata de sus

derechos fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3. Derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “*Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)*”.

A partir de la anterior disposición Constitucional, la jurisprudencia de la Corte, se ha encargado de determinar el contenido y alcance del derecho fundamental de petición¹, reconociéndole un carácter *fundamental de aplicación inmediata*. Respecto de su titularidad, ha precisado esta Corte que pueden ser personas mayores o menores de edad, nacionales o extranjeros quienes pueden acudir ante las autoridades públicas o ante particulares. Así mismo, este Tribunal ha señalado que el derecho de petición tiene un *carácter instrumental* en tanto **a través de éste se busca garantizar la efectividad de otros derechos constitucionales**, como los de información, participación política y económica, libertad de expresión, salud y seguridad social, entre otros².

Como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, la Corte ha determinado que el **núcleo esencial** del mismo se circunscribe en (i) una resolución *pronta y oportuna* de la cuestión que se solicita, (ii) una respuesta de *fondo* y (iii) su notificación. Lo anterior, ha insistido la Corte, no implica necesariamente una respuesta afirmativa al requerimiento. De allí que, no se configure vulneración alguna de dicho derecho cuando se obtiene una contestación *oportuna, de fondo, clara, precisa, congruente* y la misma es *puesta en conocimiento* del peticionario³.

Sobre el particular, las sentencias C-818 de 2011⁴ y C-951 de 2014⁵, se ocuparon de definir los elementos que integran el núcleo esencial del derecho de petición en los siguientes términos:

-La **pronta resolución** constituye una obligación de las autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general, 15 días hábiles⁶

¹ Corte Constitucional, ver, entre otras, sentencias T-578 de 1992, C-003 de 1993, T-572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-141 de 1996, T-472 de 1996, T-312 de 1999 y T-415 de 1999, t-146 de 2012, T- 392 de 2017, C- 007 de 2017.

² Corte Constitucional, sentencia T- 392 de 2017.

³ *Ibidem*.

⁴ M.P Jorge Ignacio Pretelet Chaljub.

⁵ M.P Martha Victoria Sachica Méndez.

⁶ Mediante sentencia C-951 de 2014 se prevé una excepción a esta regla cuando se relaciona con materias pensionales.

-La **respuesta de fondo** hace referencia al deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas. Según la propia jurisprudencia en la materia, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) **claridad**, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) **precisión**, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente; y c) **congruencia**, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado⁷.

En este orden de ideas, la garantía real del derecho de petición no se verifica únicamente con la simple resolución de la solicitud elevada por un ciudadano. Es también necesario "(...) *que dicha solución remedie el fondo del asunto cuando sea pertinente hacerlo*"⁸; verificándose así la claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto.

Al respecto, es preciso recordar que de acuerdo con la propia jurisprudencia Constitucional el derecho de petición "(...) *no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante*", así, se entiende que el mismo no se ha visto conculcado cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa. Esto quiere decir que, conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional en varios pronunciamientos "(...) la respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita"⁹. (Subrayado fuera del texto original) línea jurisprudencial recientemente confirmada por la T-357 de 2018.

4. Carácter subsidiario o residual de la acción de tutela

Ha sido reiterada la jurisprudencia proferida por la alta Corporación en relación con la subsidiariedad de la acción de tutela, al señalar que este mecanismo judicial excepcional, tal y como lo dispone el artículo 86 de la Constitución y el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no procede cuando la persona cuenta con otros mecanismos para asegurar la protección de sus derechos, a menos que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Con todo, también se ha considerado que la acción de tutela y su procedibilidad ha de ser considerada en concreto y no en abstracto, pues vista la naturaleza y características propias de esta acción, la protección efectiva de los derechos habrá de prodigarse de conformidad con las circunstancias de cada caso

⁷ Corte Constitucional, sentencias T-610 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil y T-814 de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T- 392 de 2017 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.

⁸ Corte Constitucional, sentencia T- 392 de 2017 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.

⁹ Corte Constitucional, sentencias T -296 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-150 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-166 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-1009 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1160 A de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1089 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-975 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-455 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.

específicamente considerado, pues de ser idónea la acción de tutela, ésta desplaza el mecanismo ordinario y se convierte en la vía principal de defensa. Pero si por el contrario, esos otros mecanismos judiciales son lo suficientemente eficaces, el amparo resulta improcedente.

Así mismo, no se puede justificar de manera exclusiva la viabilidad de la acción de tutela a partir de la celeridad con que ésta se puede tramitar, pues de ser así, las demás vías judiciales de defensa se tornan en ineficaces, y ello supondría un desajuste al sistema judicial en su integridad:

“Ahora bien, una de las características esenciales de la tutela es precisamente la celeridad y brevedad con que la persona obtiene una decisión judicial. Pero esa sola circunstancia no significa per se que pueda desplazar cualquier otro mecanismo, porque se llegaría al absurdo de anular el sistema procesal diseñado por el legislador, más aún cuando la protección de derechos fundamentales no es un asunto reservado únicamente al juez constitucional en sede de tutela, sino que debe inspirar todo el ordenamiento con independencia del mecanismo por medio del cual se haya puesto en funcionamiento la administración de justicia.”

Por lo anterior, resulta importante priorizar la adecuada aplicación del principio de subsidiariedad, pues, vistas las circunstancias fácticas concretas a cada caso, ello permite articular de manera dinámica y exacta la participación de los jueces en la determinación del espacio jurisdiccional correspondiente a fin de evitar que se presenten interferencias indebidas e invasiones de competencia.

PROBLEMA JURÍDICO

En atención a lo expuesto, corresponde a este estrado judicial, determinar si la Secretaria Distrital de Movilidad y el Simit, han vulnerado el derecho fundamental de petición presentado por la accionante el 16 de septiembre del 2020, por cuanto, no han dado respuesta, pese que ya transcurrió más del término estipulado para ello.

Bajo los anteriores postulados procede el Despacho a estudiar el tema en concreto.

DEL CASO OBJETO DE ESTUDIO

Sobre el particular, se tiene que **KAREN NATALY RUA LEMUS**, solicitó a la Secretaria Distrital de Movilidad y Simit, el descargue de los comparendos Nos. 11001000000016068866 y 11001000000020561308, y la actualización de la página del Simit; porque los mismos ya fueron cancelados.

Que dicha situación fue puesta en conocimiento a la Secretaria Distrital de Movilidad y Simit, el 16 de septiembre de 2020, mediante derecho de petición, pero a la fecha no ha obtenido una respuesta ni solución de fondo.

De otro lado, se cuenta con el informe que rindió la Secretaria Distrital de Movilidad, donde indica que no han vulnerado derechos fundamentales de la accionante, pues las actuaciones adelantadas por la entidad han sido de acuerdo al marco normativo; que la Dirección de Atención al Ciudadano, dio respuesta a la accionante, informándole que con relación al comparendo 11001000000020561308, no se evidencia pago ni curso realizado; y el comparendo 11001000000016068866, se encuentra en estado cancelado en el sistema de información de SICON de la SDM y se envió requerimiento para el descargue y actualización del comparendo en la plataforma del Simit; que la respuesta fue notificada en debida forma al correo electrónico, suministrado por la accionante, Nataly_rua0417@hotmail.com.

Por su parte, La Federación Colombiana de Municipios – SIMIT, manifiesta que frente a la solicitud del accionante de actualizar la información en el sistema, se aclara que la naturaleza de su representada es la de administrar el sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de Tránsito, que la información reportada por los organismos de tránsito a nivel nacional por ser ellos quienes tienen el carácter de autoridades y tránsito y por lo tanto emiten los actos administrativos que se reflejan en el sistema y ante esa entidad no ha sido radicada requerimiento alguno para su respectivo ajuste en el sistema.

Ahora bien, obra en el expediente comunicación de fecha 26 de noviembre de 2020, por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad, a nombre de la accionante, al correo electrónico nataly_rua0417@hotmail.com, dirección que observa este despacho, está anotada tanto en esta acción de tutela, como en el derecho de petición; donde le informan que verificada la obligación del comparendo 11001000000016068866, se encuentra al día, se envía requerimiento a su proveedor informático ETB-SICON, quien en el transcurso del día, realizara la actualización en las plataformas del Simit y Movilidad. Con respecto a la obligación del comparendo 11001000000020561308, no es posible proceder con la solicitud, dado que en el sistema contravencional SICON no reporta pago y curso por el comparendo en mención. Se verifico por parte de este despacho, la información antes indicada, en la página web del Simit y la Secretaria Distrital de Movilidad, encontrando que en efecto a nombre de **KAREN NATALY RUA LEMUS**, no figura ningún pendiente en las bases de datos de dichas entidades, respecto al comparendo 11001000000016068866, y respecto al comparendo 11001000000020561308, se encuentra activo y pendiente; dichos comparendos fueron enunciados por la accionante en esta acción constitucional.

De lo anterior concluye este estrado judicial que existe un pronunciamiento de fondo, claro, preciso y congruente a la solicitud; ya que a la fecha la petición fue resuelta; frente a la petición de descargue de los comparendos que figuran a nombre de la accionante y la actualización de la página del Simit. Que le resolvieron lo requerido por la misma, independientemente de que la respuesta sea positiva o negativa a las pretensiones de la aquí accionante. Quiere decir lo anterior que, para efectos de proteger el derecho de petición, el mismo no ha sido

transgredido, cuestión diferente es que la respuesta otorgada sea positiva o negativa a los intereses de la accionante, cuestión que escapa a la necesidad de protegerse el derecho de la accionante por vía de tutela.

Como consecuencia de lo anterior, se está ante un **HECHO SUPERADO**, como quiera que si no se había emitido una respuesta, en el desarrollo de esta tutela, esto ya se dio; razón por la cual no existe amenaza al derecho fundamental de petición, toda vez que el objeto del mismo era un pronunciamiento de fondo, que ya se dio. De este modo, se entiende por *hecho superado* la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informado a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado.¹⁰

Al respecto, en la Sentencia T- 439 de 2018 M.P. CRISTINA PARDO SCHLESINGER, se puntualizó respecto al marco conceptual del Hecho Superado:

- (i) *El hecho superado sólo puede producirse de manera previa al proferimiento de una sentencia que ampare el derecho fundamental invocado para su protección.*
- (ii) *Los fallos de tutela son de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de que hayan sido impugnados, conforme a lo prescrito en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Razón por la cual, no constituye hecho superado, sino un simple cumplimiento de sentencia, la conducta que acata la orden impartida por el juez de primera instancia en procura de amparar derechos fundamentales.*
- (iii) *Por lo tanto, en las circunstancias descritas en el párrafo precedente, el ad quem no podría declarar el acaecimiento de un hecho superado, encontrándose limitado a confirmar o infirmar la providencia del a quo.*
- (iv) *Es preciso reiterar que el “hecho superado” sólo se produce cuando las acciones u omisiones del accionado satisfacen íntegramente el derecho fundamental del cual se adujo una vulneración.*
- (v) *Por consiguiente, dicha hipótesis no puede predicarse respecto de derechos fundamentales cuyo resarcimiento dependa de conductas que deban prolongarse en el tiempo, superando el lapso procesal de la tutela. Ello, por cuanto a que en tal circunstancia, al finalizar el trámite constitucional, no se habría satisfecho aun plenamente el derecho invocado y se impediría al accionante ejercer los incidentes de desacato que fueren pertinentes, en caso de que el accionado reincidiera en la conducta vulneratoria alegada en la tutela.*

¹⁰ Sentencia T-1130 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

Tutela No. 2020-140

Accionante: Karen Nataly Rua Lemus

Accionado: Secretaria Distrital de Movilidad y Simit

Decisión: No Tutelar por Hecho Superado.

Quiere decir lo anterior que actualmente no existe una orden que impartir para procurar la protección del derecho de petición, en contra de la Secretaria Distrital de Movilidad y Simit; razón por la cual se ha de declarar la no prosperidad de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SETENTA Y CUATRO (74) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NO TUTELAR el derecho fundamental de petición, invocado por **KAREN NATALY RUA LEMUS**, quien obra en nombre propio, en contra de la Secretaria Distrital de Movilidad y Simit, por constituir la acción un hecho superado frente al derecho de petición, pues el mismo fue resuelto.

SEGUNDO: INFORMAR a la accionante y accionados que la presente decisión puede ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

TERCERO: ORDENAR que de no ser impugnada esta decisión sea remitida la actuación de copias, a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado Por:

**OMAR LEONARDO BELTRAN CASTILLO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 74 PENAL MUNICIPALCN FUNCION CONTROL GARANTIAS
BOGOTA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

953f23d24c74f846557ee4edfe50ae49d1d2d6935eb215c49611724ece0da33b

Documento generado en 03/12/2020 03:03:40 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**